



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Acta N° 72

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Demandante: JAKELINE QUESADA GUTIERREZ
Demandado: COLPENSIONES
Procedencia: JUZGADO VEINTIUNO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Radicado N.º: 05001-31-05-021-2018-00414-01 (21-034)

En Medellín, a los veintiséis (26) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021), en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 del Decreto Legislativo No 806 del 04 de junio de 2020, y en consonancia con el artículo 10 del Acuerdo PCSJA20-11567 05/06/2020 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, los magistrados integrantes de la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, **VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, quien actúa como Magistrado Sustanciador, **SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y CARLOS JORGE RUIZ BOTERO**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por COLPENSIONES, así como el grado jurisdiccional en favor de la misma entidad, dentro del proceso ordinario instaurado por **JAKELINE QUESADA GUTIERREZ** en contra de **COLPENSIONES**, radicado bajo el n.º 05001-31-05-021-2018-00414-01 (21-034).

Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala, y estando debidamente aprobado, se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda.

1. ANTECEDENTES

Mediante gestora judicial, la señora JAKELINE QUESADA GUTIERREZ persigue el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada por el deceso de GUILLERMO LEÓN ALZATE CARMONA, a partir del 29 de septiembre de 2017, el retroactivo, las mesadas adicionales, los intereses moratorios, o de manera subsidiaria, la indexación, lo ultra y extra petita y las costas del proceso, basada en que contrajo matrimonio católico con el señor GUILLERMO LEON ALZATE CARMONA, procreando dos hijas de nombre JESSICA ALZATE QUESADA y DANIELA ALZATE QUESADA, ambas mayores de edad; que COLPENSIONES mediante Resolución No 1783 del 10 de septiembre de 2014 concedió la pensión de invalidez al señor GUILLERMO LEÓN ALZATE CARMONA, efectiva a partir del 10 de septiembre de 2013; que el 29 de septiembre de 2017 falleció el señor GUILLERMO LEON ALZATE CARMONA, por causa

de origen común; que con ocasión del fallecimiento solicitó la sustitución pensional ante COLPENSIONES el 08 de noviembre de 2017, misma que fue negada a través de Resolución SUB 291253 del 16 de diciembre de 2017, con el argumento de que no hubo convivencia en los últimos 5 años anteriores al fallecimiento del causante; que la actora es la cónyuge del causante y acredita haber convivido por el lapso de 5 años en cualquier tiempo.

1.1 TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La demanda fue admitida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín mediante Auto del 15 de agosto de 2018 (fol. 24), ordenando su notificación y traslado a la accionada.

La entidad pública accionada COLPENSIONES, contestó la demanda el 12 de septiembre de 2018, a través de apoderado judicial (fols. 26 a 34), oponiéndose a las pretensiones de la demanda, aduciendo que la demandante no cumple con los requisitos legales para ser beneficiaria de la prestación económica deprecada.

A través de auto del 19 de septiembre de 2018 (Fol. 38), se tuvo por contestada la demanda por parte de COLPENSIONES.

1.2. DECISIÓN DE PRIMER GRADO

El proceso se dirimió en primera instancia mediante sentencia proferida el 01 de diciembre de 2020 (fol. 48 con CD de audiencia), oportunidad en la cual el cognoscente de instancia condenó a COLPENSIONES a reconocer y pagar a JAKELINE QUESADA GUTIERREZ la sustitución pensional por la muerte de GUILLERMO LEÓN ALZATE CARMONA, a partir del 29 de septiembre de 2017 en cuantía equivalente a UN SMLMV, incluyendo una mesada adicional por año, cuyo retroactivo hasta el 30 de noviembre de 2020, asciende a \$ 33.552.946; condenó al reconocimiento y pago de la indexación de cada una de las mesadas desde su exigibilidad hasta que se verifique su pago; autorizó a COLPENSIONES a descontar las sumas correspondientes para el sistema de seguridad social en salud; declaró probada la excepción de improcedencia de los intereses moratorios y no probadas las demás, y por contera, condenó en costas a COLPENSIONES.

1.3. APELACIÓN

La decisión adoptada fue apelada por la apoderada judicial de la entidad de la seguridad social, en procura de que se revocara el reconocimiento pensional, en razón de que los testigos no ofrecen mayor credibilidad, pues si bien dan cuenta de fechas concretas, desconocen temas relevantes de la convivencia que pudiere presentarse entre la demandante y el causante, además de que no tenían contacto con aquellos; que la demandante no compartía su proyecto de vida con el causante, no hubo apoyo en los últimos días de la vida del de cujus. Acota que debe tenerse en cuenta la sentencia SL1730 de 2020, en la que el máximo tribunal de esta jurisdicción interpreta las normas relativas a la pensión de sobrevivientes, en la que establece el requisito de los 5 años de convivencia para el caso del pensionado fallecido; que los 5 años de convivencia exigidos son anteriores a la muerte del pensionado, y no en cualquier tiempo; que se debe propender por proteger la unidad familiar, pero en el caso concreto no se presenta, dado que la actora no estuvo acompañando al causante antes del fallecimiento; que no existía en la pareja el acompañamiento mutuo, pues solo se verifica un vínculo formal de matrimonio. En suma, que no existió convivencia real y afectiva al momento del deceso del señor GUILLERMO LEÓN ALZATE CARMONA.

El apoderado judicial de COLPENSIONES aportó oportunamente alegatos de conclusión en los que solicita revocar la sentencia de primera instancia, pues se evidencia en las pruebas aportada al proceso la improcedencia de la sustitución de la pensión a favor de la peticionara, por no acreditar la convivencia en los últimos 5 años anteriores al fallecimiento con el causante, pues la convivencia se dio hasta el año 2000 y el señor Guillermo León Álzate Carmona falleció en el año 2017.

1.4. CONSULTA

Teniendo en cuenta que la decisión adoptada en primera instancia fue desfavorable a COLPENSIONES, se examinará igualmente la sentencia en su integridad en el grado jurisdiccional de consulta en su favor.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en segunda instancia y al no observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el extremo litigioso, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del C.P.L. y S.S. se estudiará los puntos de disenso materia de la alzada, al tiempo de revisar la sentencia en su integridad en virtud al grado jurisdiccional de consulta en favor de COLPENSIONES, para lo cual se plantea el estudio del siguiente:

2.1. PROBLEMA JURÍDICO

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a dilucidar:

1) Si la señora JAKELINE QUESADA GUTIERREZ reúne los requisitos legales para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada por el señor GUILLERMO LEÓN ALZATE CARMONA (q.e.p.d.), y de ser así, si hay lugar al pago de la indexación.

2.2. TESIS DE LA SALA Y SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS JURÍDICOS PLANTEADOS.

El sentido del fallo de esta Corporación será **CONFIRMATORIO**, respecto al reconocimiento pensional, pero se MODIFICARÁ el retroactivo pensional, siguiendo la tesis según la cual, en materia de pensión de sobrevivientes respecto a un pensionado fallecido y con sociedad conyugal vigente, pero separado de hecho, el requisito de convivencia corresponde a la acreditación de los 5 años en cualquier tiempo, de conformidad con los planteamientos que pasan a exponerse:

2.2.1. PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES

Para los fines de la alzada, en lo que interesa al solvento de la litis, no se discute: (i) que COLPENSIONES reconoció pensión de invalidez a Guillermo León Alzate Cardona a partir del 01 de septiembre de 2013, conforme Resolución N° 1783 de 10 de septiembre de 2014 (Fol. 20); (ii) que contrajo matrimonio con Jakeline Quesada Gutiérrez el 27 de mayo de 1989, conforme registro civil de matrimonio glosado a folio 13; (iii) que procrearon dos hijas de nombres Jessica Álzate Quesada y Daniela Álzate Quesada, ambas mayores de edad a la fecha del óbito (Fol. 14 y 15); (iv) que el señor Guillermo León Álzate Cardona (Q.E.P.D) falleció el 29 de septiembre de 2017, según registro civil de defunción de folio 16; (v) que el 08 de noviembre de 2017 se presentó a reclamar la sustitución pensional ante COLPENSIONES la señora Jakeline Quesada Gutiérrez, en calidad de cónyuge supérstite (Fol. 17 a 18); (vi) que COLPENSIONES mediante resolución SUB 291253 del 16 de diciembre de 2017 le negó la prestación con el argumento de que: *“no acreditó cinco (5) años de convivencia anteriores, al fallecimiento del causante”* (Fols. 19 a 22).

Así las cosas, lo primero que viene a propósito colegir es que, al *sub lite* le es aplicable el régimen legal contenido en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, pues el causante falleció el 29 de

septiembre de 2017 y la modificación normativa en comento entró a regir a partir del 29 de enero de 2003.

En orden a lo anterior, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, los miembros del grupo familiar del pensionado que fallezca. Punto sobre el cual no hay controversia, puesto que COLPENSIONES le reconoció a Guillermo León Alzate Cardona la pensión por invalidez a partir del 01 de septiembre de 2013, conforme Resolución N° 1783 de 10 de septiembre de 2014.

Acreditado como está, que el fallecido sí dejó causado el derecho para que sus posibles beneficiarios puedan acceder a la pensión de sobrevivientes, conviene resaltar el contenido del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, atinente a quiénes son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, entre otros, en forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstites, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha de fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad y acredite la existencia de vida marital con el causante por espacio mínimo de cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del fallecimiento, y cuya acreditación es carga procesal de los eventuales beneficiarios, tal como lo adoctrina la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, en sentencia con radicación No 38213 del 28 de septiembre de 2010, en la que sostuvo que la convivencia le incumbe probarla a quien afirma el hecho.

Adicionalmente, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL4771-2020, reiteró los lineamientos del correcto entendimiento del inciso 3° del literal b) del Art. 13 de la Ley 797 de 2003, cuando se presente separación de hecho del cónyuge supérstite con vínculo matrimonial vigente, evento en el cual la convivencia de los 5 años de que trata la norma para el cónyuge supérstite puede ser cumplida en cualquier tiempo, sin que se exija que continúe actuante el vínculo afectivo al momento del fallecimiento, como así lo aquilató:

“Pues bien, de la normativa trascrita se colige que, en el caso de la cónyuge con vínculo matrimonial vigente y separada de hecho del causante, la acreditación para el momento de la muerte de algún tipo de «vínculo afectivo», «comunicación solidaria» y «ayuda mutua» que permita considerar que los «lazos familiares siguieron vigentes» para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, configura un requisito adicional que no establece el inciso 3.º del literal b). Nótese que en el texto de la aludida disposición se hace referencia es a que, en ese caso, la

consorte tiene derecho a una cuota parte de la pensión de sobrevivientes, proporcional al tiempo convivido con el afiliado fallecido.

Por lo demás, ese es el alcance que al precepto en comento le ha dado esta Corporación, pues su jurisprudencia de manera reiterada ha adoctrinado que «la convivencia de la consorte con vínculo marital vigente y separación de hecho con el pensionado o afiliado en un periodo de 5 años», puede ser acreditado en cualquier tiempo, puesto que de esta manera se da alcance a la finalidad de proteger a quien desde el matrimonio aportó a la construcción del beneficio pensional del causante, en virtud del principio de solidaridad que rige el derecho a la seguridad social (CSJ SL 41637, 24 en. 2012, CSJ SL7299-2015, CSJ SL6519-2017, CSJ SL16419-2017, CSJ SL1399-2018, CSJ SL5046-2018, CSJ SL2010-2019, CSJ SL2232-2019 y CSJ SL4047-2019).

Justamente, esa es la teología y alcance del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, se reitera, no dejar desamparado(a) al(la) cónyuge supérstite separado(a) de hecho que mantiene el vínculo marital vigente, quien en su momento aportó a la construcción del derecho pensional del causante; pero, además, su contenido encuadra en las realidades o situaciones sociales que regula dicho precepto, esto es, no invisibiliza las diferentes circunstancias que generalmente rodean la dejación de la vida en comunidad entre esposos.

En efecto, no es ajeno al conocimiento colectivo que la decisión de separarse de hecho del cónyuge, comúnmente proviene de problemas estructurales que aquejan la relación de pareja, que, debido al impacto emocional que aquellos generan en los consortes, terminan por convertirse en causas de distanciamiento.

Cada una de esas situaciones, por supuesto, no pueden ser previstas por el legislador; y es precisamente, en ese contexto, en el que el juez entra a jugar su rol de intérprete de la norma a efectos de zanjar la necesidad de que el ordenamiento jurídico cubra esos escenarios. Así lo reconoció, por ejemplo, esta Corporación en un reciente pronunciamiento en el que explicó que la convivencia no se puede descartar por la pura y simple separación de cuerpos de la pareja y, en dicho caso, otorgó la pensión de sobrevivientes a la cónyuge supérstite del causante pese a no convivir con él, ni mantener lazos de afecto, pues determinó que la renuncia a la cohabitación estaba justificada por los malos tratos a que era sometida y obedecía al ejercicio legítimo de protección de sus derechos a la vida e integridad personal (CSJ SL2010-2019).

Con todo lo anterior, bajo el anterior supuesto, respecto del requisito de la vigencia de la sociedad conyugal para el cónyuge separado de hecho, consagrado en la parte final del inciso 3° del literal b) del Art. 13 de la Ley 797 de 2003, delineó la Corte Constitucional en la sentencia C-515 de 2019:

“(…) en el caso del cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal disuelta, por decisión libre de los cónyuges se extinguen los efectos patrimoniales del vínculo matrimonial, aunado a la separación de hecho, por lo que, no existen en este caso vínculos afectivos o económicos que permitan inferir su calidad de beneficiario. (….) el requisito de la vigencia de la sociedad conyugal tiene la finalidad de concretar el objeto de la pensión de sobrevivientes, esto es, proteger el núcleo familiar del causante (….) [teniendo] como base el requisito de convivencia efectiva con el causante. Sin embargo, (….) la ausencia de una convivencia efectiva dentro de los 5 años anteriores a la muerte del causante, justifica que el legislador, en ejercicio del amplio margen de configuración en materia pensional (…), establezca la vigencia de la sociedad conyugal como una condición necesaria para reconocer este derecho pensional al cónyuge supérstite (….) separado de hecho, (…), guiada por los principios que definen la pensión de sobrevivientes. (….) no solo desde la perspectiva del régimen pensional sino también en consideración a los efectos [civiles] que produce la disolución de la sociedad conyugal. En este punto, el artículo 1781 del Código Civil establece que mientras que la comunidad de bienes subsista, y a falta de capitulaciones, el haber social se entiende conformado por (….) las “pensiones” (….). Luego, cuando la sociedad conyugal se disuelve, los haberes del pensionado o del afiliado dejan de ser parte de la masa patrimonial, razón por la que se extingue el derecho para sustituir al causante respecto de su pensión o cesa la expectativa de recibir una eventual prestación pensional, según corresponda.”

De forma que, a diferencia del caso de la convivencia simultánea, en el supuesto de la cónyuge separada de hecho del causante al momento del fallecimiento, la doctrina constitucional impone que deba satisfacerse el requisito legal de la vigencia de la sociedad conyugal, a efecto de que la cónyuge supérstite pueda acreditar los 5 años de convivencia en cualquier época.

Ello así, lo primero que advierte la Sala es que COLPENSIONES se equivocó al negar la prestación por exigirle a la actora la acreditación de los 5 años de convivencia anteriores al deceso del señor Guillermo León Alzate Cardona (Q.E.P.D), pues para hacerse merecedora de la prestación le bastaba acreditar la convivencia por un lustro -5 años- en

cualquier tiempo, como acertadamente se logró demostrar en el transcurso del proceso, y como a bien tuvo el a quo al dar por acreditado tal requisito con la prueba testifical recabada.

Veamos, el apoderado judicial de COLPENSIONES en la alzada se duele que los testigos escuchados en desarrollo del diligenciamiento no ofrecen mayor credibilidad, en cuanto que desconocen temas relevantes de la convivencia; sin embargo, debe precisar la Sala que el a quo fundó la condena en el dicho por la testigo BLANCA NUBIA CARMONA RESTREPO, desechando las aserciones de los otros dos deponentes, BAYRON ANDRES ALZATE MORENO y OMAR CAMILO ALZATE MORENO, en la medida en que estos solo brindaron información de referencia, es decir, que nada les consta de manera directa sobre la convivencia de Jakeline Quesada Gutiérrez y Guillermo León Alzate Cardona (Q.E.P.D), además porque para la época en que aquella pareja contrajo matrimonio, el primero en mención expresó que “estaba muy pelado”, y el segundo manifestó que para esa calenda “recién había nacido”, inclusive, este último para la fecha en que se aduce se dio la ruptura de la convivencia en el año 2000, contaba con apenas 12 años, dichos que en efecto, para esta Judicatura, al igual como lo consideró el a quo, no merecen credibilidad y no constituyen un medio probatorio suasorio que permitan dar por acreditado el requisito de convivencia exigido, quedando en ese orden, pendiente la valoración probatorio de la atestiguación de la señora BLANCA NUBIA CARMONA RESTREPO.

Así pues, tenemos que BLANCA NUBIA CARMONA RESTREPO, como cuñada de la actora, es conteste en afirmar que al momento del óbito el causante vivía solo en Manrique, después de que falleciera su madre; dio cuenta que Jakeline Quesada Gutiérrez y Guillermo León Alzate Cardona (Q.E.P.D), contrajeron matrimonio por el rito católico en el año de 1989 en la Iglesia de Manrique, y que asistió a tal evento; que como pareja convivieron juntos por espacio de 11 años, hasta el año 2000, cuando se separaron por cuanto su hermano “*cayó en el alcoholismo y era difícil la convivencia*”, momento en el cual, cada uno se fue para donde la mamá, y que a pesar de la separación, el *de cujus* nunca dejó de ver por ellas; que no le conoció otra relación, ni durante el matrimonio, ni después de la separación; que durante el lapso que convivieron juntos los visitaba entre 2 o 3 veces al año, y que con posterioridad al año 2000 mantenía comunicación con Jakeline Quesada Gutiérrez; que el día de las exequias de Guillermo León Alzate Cardona (Q.E.P.D) asistió al funeral, donde también asistieron las hijas de Guillermo León Alzate Cardona, a la vez, sus sobrinas, y preguntó por Jakeline Quesada Gutiérrez, manifestando que su madre estaba bastante afectada, y que como era nerviosa no asistía a funerales.

Es por ello, que a juicio de la Sala tales dichos fueron espontáneos y no se aprecian contradicciones, al contrario, guardan plena coincidencia con lo expresado por la actora en el interrogatorio de parte, se itera, dan cuenta que en efecto, la pareja contrajo matrimonio en el año de 1989 y se separaron en el año 2000 por la situación de alcoholismo en que se encontraba sumido el señor Guillermo León Alzate Cardona (Q.E.P.D); que después de la separación él se fue a vivir con la mamá en Manrique, además que a pesar de la separación, el de cujus cubría los gastos de sus hijas, y compartían algunos momentos, bien sea que lo visitaran en la casa o se encontraran en algún lugar los 4, y finalmente, que no asistió al funeral porque ser una persona demasiado nerviosa.

Como puede apreciarse, la vigencia del vínculo conyugal al momento de la muerte del causante, está probada con el registro civil de matrimonio (fol. 13), según el cual, contrajeron matrimonio católico el 27 de mayo de 1989, sin anotación de disolución y liquidación de la sociedad conyugal. Documento público solemne que permite educir a la Sala, sin hesitación alguna, que la demandante tenía sociedad conyugal vigente con el causante al momento del deceso, y que al haberse dado la ruptura o separación de hecho a partir del año 2000, se logra acreditar por la actora la convivencia por un lapso del 27 de mayo de 1989 hasta el año 2000, es decir, por más de 5 años del que versa el inciso final del literal *b)* del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, lo cual permite acreditar los 5 años de convivencia en cualquier época, tal y como acertadamente concluyó el *a quo*.

Ello así, al aplicarse los criterios de la sana crítica en racional y libre persuasión en términos del artículo 61 del CPT y de la SS, se extrae que con el acervo probatorio recaudado se probó que Jakeline Quesada Gutiérrez tenía sociedad conyugal vigente con el causante al momento el óbito, y convivió con aquel por espacio superior a los 5 años en cualquier tiempo, aunado a que, tal como se pregona en la sentencia SL2010-2019, el juzgador debe valorar de manera concreta las circunstancias especiales en que tuvo lugar o el contexto en que se da la separación de hecho o renuncia a la cohabitación, en el sentido de que la legislación no puede regular todos los supuesto de hecho, y en ese orden, menciona la jurisprudencia que: *“En efecto, no es ajeno al conocimiento colectivo que la decisión de separarse de hecho del cónyuge, comúnmente proviene de problemas estructurales que aquejan la relación de pareja, que, debido al impacto emocional que aquellos generan en los consortes, terminan por convertirse en causas de distanciamiento”*, y a manera de ejemplo, se encuentra la separación de hecho por maltrato físico y psicológico, o por razón del alcoholismo como se estudió por el órgano de cierre de esta jurisdicción en la sentencia de radicado No 22618 de 2004, en la que

se concedió la pensión de sobrevivientes a la cónyuge con vínculo matrimonial vigente pero separada por hechos no atribuibles a la beneficiaria, debido a la situación de embriaguez y de maltrato físico a que era sometida por su consorte, patrón fáctico similar al caso puesto a consideración de esta Colegiatura, habida cuenta de que la ruptura de la cohabitación se presentó a partir del año 2000 debido a la dependencia psicológica y física al alcoholismo del señor Guillermo León Alzate Cardona (Q.E.P.D), y que como lo manifestó la hermana de éste en la testifical rendida: *“era difícil la convivencia”*.

Visto lo anterior, no se discute que la accionada acreditó la convivencia con el causante en cualquier tiempo, de modo que, le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, a partir del 29 de septiembre de 2017, sobre el 100% de la prestación económica que percibía Guillermo León Alzate Cardona (Q.E.P.D) para el momento de su fallecimiento, esto es, \$737.717 (Fol. 20).

En cuanto a la excepción de prescripción, tenemos que ninguna de las mesadas reconocidas se encuentra afecta a tal fenómeno jurídico, dado que las mesadas se causaron a partir del 29 de septiembre de 2017, y que la demandante solicitó el reconocimiento pensional a la entidad el 08 de noviembre de 2017, no solo interrumpiendo sino suspendiendo el término prescriptivo hasta que la entidad surtiera la actuación administrativa correspondiente (C-0792 de 2006), lo cual ocurrió el 16 de diciembre de 2017 con la expedición de la Resolución SUB 291253, notificada el 21 de diciembre de 2017 (fol. 19), siendo incoada la presente acción judicial el 03 de agosto de 2018 (fol. 8), vale decir, sin que transcurriera el término legal de 3 años entre tales calendas, según y conforme lo dispuesto en los artículos 488 del C.S.T y 151 del C.P.T y de la S.S.

Consecuente con lo expuesto, con arreglo a lo previsto en el artículo 283 del CGP la condena se extenderá hasta la fecha en que se profiera la sentencia de segunda instancia, y una vez realizados los cálculos matemáticos del caso por la Sala, se obtiene un valor de **\$ 38.058.720**, correspondiente a las mesadas causadas entre 29 de septiembre de 2017 y el 31 de marzo de 2021, y a partir del 1º de abril de 2021 Colpensiones deberá cancelar a la actora una mesada pensional equivalente al SMMLV, la cual se incrementará anualmente conforme el reajuste que fije o acoja el Gobierno Nacional, y que se pagará por 13 mesadas pensionales, según lo preceptuado en el Acto Legislativo 01 de 2005, dado que la pensión de invalidez que venía recibiendo el señor Guillermo León Alzate Cardona (Q.E.P.D), fue causada con posterioridad al 31 de julio de 2011.

RETROACTIVO PENSIONAL			
Año	Valor pensión (mínimo)	Mesadas	Total Retroactivo (mínimo)
2017	\$ 737.717	4,066666667	\$ 3.000.049
2018	\$ 781.242	13	\$ 10.156.146
2019	\$ 828.116	13	\$ 10.765.508
2020	\$ 877.803	13	\$ 11.411.439
2021	\$ 908.526	3	\$ 2.725.578
TOTAL			\$ 38.058.720

Se autoriza igualmente a COLPENSIONES para que descuente del retroactivo pensional, las cotizaciones que por mandato legal deben realizarse con destino al sistema de seguridad social en salud, de conformidad con los lineamientos trazados por la H. Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral-, en sentencia del 6 de marzo de 2012, Radicado 47528, M.P. Rigoberto Echeverry Bueno.

2.2.2 INDEXACIÓN

Siendo que el a quo procedió a impartir condena por indexación, se procederá a confirmarla en sede de instancia, siguiendo el nuevo criterio fijado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL359-2021, con la que recogió la tesis según la cual la corrección monetaria únicamente procedía a petición de parte, para en su lugar, sostener que “el juez tiene la facultad de imponer la indexación de las condenas de manera oficiosa”, en lo que al punto concluye:

“la imposición oficiosa de la actualización no viola la congruencia que debe existir entre las pretensiones de la demanda y la sentencia judicial. Por el contrario, pretende, con fundamento en los principios de equidad e integralidad del pago, ajustar las condenas a su valor real y, de esta manera, impedir que los créditos representados en dinero pierdan su poder adquisitivo por el fenómeno inflacionario. Es decir, procura que la obligación se satisfaga de manera completa e integral”.

Por tanto, como en el sub examine el monto de la condena infligida se ve menguado por el hecho notorio de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, deberá Colpensiones cancelar las sumas de dinero ordenadas por concepto de retroactivo pensional debidamente indexadas a partir de su causación y hasta la fecha en que se cancele la obligación, utilizando la fórmula establecida para el efecto por la Sala de Casación

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como lo enseña de manera iterativa en sus fallos.

2.3. COSTAS

Sin costas en esta instancia, pues si bien COLPENSIONES presentó recurso de apelación, la sentencia se revisó en su integridad en su favor en virtud del grado jurisdiccional de consulta. Las de primera instancia se confirman.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral **PRIMERO** de la sentencia materia de apelación y consulta proferida el 01 de diciembre de 2020 por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, el cual quedará de la siguiente forma:

***“PRIMERO: CONDENAR** a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES a pagar a la señora JAKELINE QUESADA GUTIERREZ, la pensión de sobrevivientes por la muerte del pensionado GUILLERMO LEÓN ALZATE CARMONA, a partir del 29 de septiembre de 2017, en su condición de cónyuge supérstite. Y como retroactivo pensional causado desde el 29 de septiembre de 2017 hasta el 31 de marzo de 2021, la suma de **\$38.058.720**. A partir del 1º de abril de 2021, la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, deberá pagar a la señora JAKELINE QUESADA GUTIERREZ, una pensión de sobrevivientes equivalente al salario mínimo mensual legal vigente, que se incrementará anualmente, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, sin perjuicio de la mesada adicional de diciembre”.*


SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia materia de apelación y consulta.


TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia. Las de primera se confirman.


Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**.


Sentencia Proceso Ordinario: Jakeline Quesada Gutiérrez Vs Colpensiones.
Sala Quinta de Decisión Laboral
Radicado Interno: 21-034
Radicado único Nacional: 05001-31-05-021-2018-00414-01
Déjese copia de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de origen.

Se declara así surtida el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

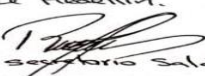

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada


CARLOS JORGE RUIZ BOTERO
Magistrado


RUBÉN DARIO LOPEZ BURGOS
Secretario

Constancia Secretarial
Se da constancia que las anteriores firmas corresponden a la firma original de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral, de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín.


Secretario Sala Laboral

Certifico: Que el auto anterior fue notificado por **ESTADOS No. 70** fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8:00 a.m.
Medellín, 27 de abril de 2021, y pueden consultarse en
<https://tribunalmedellin.com/laboral/estados-edictos-y-traslados-laboral>

Secretario